



# Repensar el Desarrollo de América Latina y el Caribe para el Siglo XXI

James Petras\* 53

## INTRODUCCIÓN

América Latina y el Caribe (LAC) pasaron por un profundo proceso de *descentralización* durante el último tercio del siglo xx. Ambos han experimentado la *restauración* de formas *pre-nacionales* de la propiedad privada y el *cambio* de las relaciones sociales de producción (capital-trabajo). Se han reintroducido formas primitivas de acumulación de capital, caracterizadas por un fuerte asimiento de la tierra urbana y rural y el desplazamiento masivo de la población inducido por el estado y, en algunos casos, por las elites paramilitares.

Los modernos sistemas de información, la expansión de los mercados mundiales, a gran escala, las fusiones y adquisiciones a largo plazo conduciendo a niveles sin precedentes de centralización y concentración del capital se combinan y articulan, y facilitan la restauración de las formas y estructuras políticas pre-nacionales.

Las consecuencias socioeconómicas y políticas de esto, así como de un desarrollo desigual, son

la intensificación de las desigualdades de clase, una desarraigada masa creciente de campesinos y trabajadores semi-urbanizados, y la integración de una nueva burguesía súper-rica en Latinoamérica y el Caribe dentro de los circuitos imperiales americanos, europeos y asiáticos. La aparición del capitalismo pre-nacional y externamente controlado a través de Latinoamérica ha conducido a un aumento masivo de los conflictos nacionales y de clase, en una variedad de aspectos socioeconómicos, implicando a un amplio conjunto de estratos sociales, utilizando estrategias poco ortodoxas.

Las luchas sociales reflejan los esfuerzos por contrarrestar los reveses socioeconómicos y las formas pre-nacionales, formas primitivas de explotación así como las formas modernas de explotación tecnológica. Las vagas exhortaciones por parte de la Izquierda y la Derecha para resistir o para defender la «globalización» o el «neoliberalismo» pasan por alto la fusión histórica de

---

\*Traducción de Helena Chacón López



las formas pasadas, presentes y las formas surgidas de las organizaciones capitalistas. Para «repensar el desarrollo» de América Latina y el Caribe para el siglo XXI se requiere que entendamos el proceso y las estructuras que configuran la región.

## RESTAURACIÓN Y CAMBIOS

Los últimos 25 años han presenciado el *desmantelamiento* de la estructura económica entera que caracterizó la construcción de la nación-estado de América Latina y el Caribe y el retorno a formas económicas pre-nacionales. Desde finales del siglo XIX, pero especialmente entre 1930-1975, América Latina y el Caribe crearon un estado y una economía nacionales: sobre todo las inversiones públicas a gran escala en industrias nacionales, infraestructura, enseñanza superior, alfabetización, sanidad pública, mercados locales, y las instituciones de crédito y financieras crearon la base material para la nación-estado moderna. El estado, en diferentes momentos y lugares, nacionalizó sectores estratégicos como los recursos naturales, el petróleo, el hierro, el cobre, el estaño, transportes marítimos y terrestres y servicios públicos (telecomunicaciones, agua, energía y luz). El capital extranjero no estaba ausente — pero en la mayoría de los casos fue regulado para complementar, no desplazar, el capital nacional — como fue el caso del modelo normal de desarrollo de EE.UU., Europa y Japón. A gran escala el capital extranjero fue mayoritariamente denegado por parte de los propietarios en muchos sectores; las fábricas fueron obligadas a cumplir con las reglas de «contenido nacional»; la propiedad de la tierra era restringida o negada en algunos países. Las remesas de beneficio fueron reguladas al igual que los préstamos de los bancos locales. En otras palabras, América Latina pasó de ser un estado pretoriano «pre-nacional» ligado a la dominación extranjera de los enclaves de exportación a una nación-estado capaz de financiar y desarrollar las infraestructuras sociales de una sociedad moderna.

Comenzando con una serie de derrotas políticas históricas a mediados de los años setenta y que continúan hoy (2007), toda la arquitectura social-económica de la moderna economía nacional y el estado fue demolida y la economía y la política pre-nacional fue restaurada.

Bajo los lemas de la privatización, mercados libres y la desregulación, los regímenes neoliberales reorganizaron sus economías hacia los propios enclaves extranjeros orientados a la exportación. El proceso de descentralización por lo general se componía de dos fases: las empresas estatales privatizadas fueron vendidas a las elites privadas locales con lazos políticos con el régimen, que revendieron las facilidades productivas a inversores extranjeros y conglomerados (adquisiciones) o se hicieron socios menores (fusiones con corporaciones multinacionales).

Las privatizaciones fueron acompañadas por el saqueo de los recursos naturales y la apropiación por la fuerza de la tierra rural y urbana — bien a través de políticas de estado, de falsas reivindicaciones territoriales, utilizando «mecanismos del mercado» puestos en práctica por el ejército, bien con escuadrones de la muerte paramilitares y de contrainsurgencia que desahucieron a millones de pequeños campesinos y granjeros (como en Colombia). Mientras se suponía que los programas de contrainsurgencia eran motivados por objetivos políticos de destrucción de los movimientos guerrilleros, sirvieron para re-concentrar la propiedad de la tierra en manos de las grandes elites agro-exportadoras ligadas al régimen y al modelo pre-nacional.

La reintroducción de estructuras y de políticas pre-nacionales ocurrió en el contexto de una estructura de clase urbano-industrial relativamente definida, con programas sociales financiados públicamente (distinta a la versión del siglo diecinueve). La reintroducción del modelo colonial causó un daño inmenso en la estructura de la sociedad completa — convirtiendo a los trabajadores modernos en trabajadores dependientes, forzando a los trabajadores especializados a huir del país hacia las naciones modernas o a los estados imperiales de ultramar. La migración del entorno rural al urbano no fue acompañada por la industrialización sino por la desindustrialización. Es decir, lo que es llamado «neo-liberalismo» es la fuerte restauración política de las anteriores formas de explotación capitalista (eliminando las redes económicas locales, minando los mercados nacionales y la formación de trabajadores asalariados cualificados y de una clase profesional).

La expresión más clara de la naturaleza de la restauración de las formas pre-nacional es la expansión de la educación y servicios sanitarios privados que crean enclaves de privilegio, que aseguran la reproducción de una estructura de clase rígida característica de las anteriores sociedades de la exportación agro-mineral.

Por otra parte, el asalto general a los empleados del sector público, sus salarios, su empleo y sus pensiones es una parte esencial de la sustitución de unos servicios públicos profesionales por la «caridad» y el «voluntariado» privado, paternalista, realmente propio de una época anterior a los estados nacionales.

La reversión a los servicios privados depende de la «buena voluntad» de los benefactores adinerados en lugar de las obligaciones públicas en cubrir las necesidades básicas del ciudadano acompañada de la usurpación pública del espacio privado para un nuevo sector depredador del capitalismo. El sector más lucrativo, más dinámico del capital se encuentra entre los capitalistas inmobiliarios, profundamente ligados a las instituciones financieras, a las empresas de la construcción y al estado. La inversión en inmuebles es el sector más provechoso a escala mundial; haciendo uso de la ayuda del estado vía crédito fácil, interés bajo, alta liquidez y normativas favorables de utilización del suelo. Un estudio de los nuevos ricos multimillonarios en América Latina, Rusia, China y la India demuestra que los beneficios de las propiedades inmobiliarias son el factor clave para convertir a los millonarios en multimillonarios.

## EL PAPEL DEL ESTADO EN LA RESTAURACIÓN DE LA ECONOMÍA PRE-NACIONAL

Al igual que pasaba con el anterior capitalismo pre-nacional, el capitalismo inmobiliario actual está basado en la propiedad y en el arriendo de la tierra y las valoraciones especulativas, y no en los beneficios derivados de la producción de bienes y servicios. El estado juega un papel clave en la expansión del capital inmobiliario, embargando la propiedad rural y urbana de gran valor perteneciente a habitantes pobres rurales y de la ciudad y transfiriéndolas a las elites adineradas. En otras palabras, la fuerza política, los métodos del capitalismo primitivo («acumulación

primitiva») desplazan a las masas y permiten a las inmobiliarias y a otras formas de capital -como los agro-industria- explotar la tierra.

El estado rentista proporciona subsidios a la exportación y reducción de impuestos, como también inversiones en infraestructuras a gran escala, los cuales están ligados a los nuevos complejos empresariales, residenciales y mercados nacionales e internacionales y con el empleo.

El estado rentista, pre-nacional no «desregula», «reduce» o «se retira». Estableció las *nuevas regulaciones* dando primacía a los inversores extranjeros y *eliminaba las regulaciones* que promovían las empresas públicas nacionales y los programas sociales. El estado *aumenta* su aparato represivo y policial y su intervención en la sociedad civil y *reduce* el número y la calidad de los servicios sociales. El estado interviene activamente para captar asociaciones civiles y organizaciones no-gubernamentales (sic) (ONGs), mientras son eliminadas las agencias que protegen el medio ambiente, la salud, la seguridad laboral, a la población indígena y a los niños.

55

## NUEVA ESTRUCTURA DE CLASE: LOS CUATRO NIVELES

El gran reingreso masivo de capital extranjero en sectores estratégicos de la economía nacional representa la reversión a una economía pre-nacional o más exactamente a una entidad colonial – aunque con una gran diferencia económica, de clase y de las instituciones y las organizaciones políticas. No como en el período colonial anterior, basado exclusivamente en exportaciones agro-minerales, la re-colonización contemporánea penetra en todos los sectores, primarios, secundarios y terciarios. Las grandes corporaciones multinacionales cuentan con avanzadas tecnologías de la información y una variedad de nuevos instrumentos financieros para extraer rentas, beneficios, derechos y ganancias especulativas inesperadas y transferirlas a varios miles de multimillonarios en los centros imperiales y las capitales colonizadas del mundo.

El sistema imperial tiene cuatro niveles de explotación interrelacionados. En el nivel inferior la nueva arquitectura imperial basa su sustento en el poder del trabajo, los recursos productivos





explotados y extraídos de América Latina, Asia y África. En el siguiente nivel, capitalistas agro-minerales e industriales obtienen beneficios de la explotación del trabajo y de los recursos naturales. En el tercer nivel, las propiedades inmobiliarias, comerciales, las actividades bancarias y los capitalistas de la información y las tecnologías obtienen intereses, alquileres y derechos. En la cumbre de la pirámide imperial está la inversión, las pensiones, las apuestas compensatorias y los fondos derivados, cuyos beneficios vienen de la compra-venta, de fusionar y de adquirir corporaciones multinacionales y formular teorías acerca del papel de los especuladores. La jerarquía de cuatro niveles define la arquitectura del desarrollo contemporáneo de Latino América en el siglo XXI.

56 En cada nivel, el valor producido en los niveles inferiores se transfiere a un nivel superior, lo cual da lugar a una pirámide invertida de riqueza: el 0,01% de los súper-ricos que están en la cumbre poseen más valores que el 50% de los que están en la base. Hablar de una «clase capitalista» sin explicar su posición en la arquitectura imperial significa confundir la nueva configuración del poder imperial. Los vínculos entre los diferentes niveles de la estructura de clases son poderosos por las relaciones entre los sectores y sus intereses comunes en la explotación del trabajo y los recursos naturales. No hay burgueses progresistas aunque sí existen conflictos entre estos últimos y los sectores más poderosos de los capitalistas que están por encima de ellos.

América Latina, en su actual etapa de involución hacia las formas pre-nacionales, se basa en prácticas políticas y económicas extremadamente depredadoras de acumulación de capital. Las nuevas relaciones entre el estado y la economía comenzaron con las destrucciones del estado nacional y la restauración de las estructuras coloniales, injertados sobre la fuerza laboral moderna, las instituciones nacionales y la conciencia social. La construcción y expansión de la nueva economía centrada en las finanzas, los bienes inmuebles y la extracción depende en gran medida del control político. Las nuevas economías no se auto-sustentan mediante mecanismos puramente de mercado. Se enfrentan a un gran número de poderosos adversarios de clase que han sufrido una profunda alienación.

## CONTRADICCIONES Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO PRE-NACIONAL

El regreso y la restauración de un régimen y una estructura económica pre-nacionales han creado una multitud de enemigos y vulnerabilidades que pueden conducir a profundas transformaciones.

Los cambios son recientes, brutales y veloces, pero la ideología que los justifica no ha conseguido la hegemonía entre la gran mayoría, y la mayoría de los regímenes electos no han logrado lanzar un nuevo proyecto político. En segundo lugar, las profundas desigualdades, la concentración y centralización de capital que se manifiesta a través del crecimiento masivo de fusiones y adquisiciones (M&A: «mergers and acquisitions») y los ingresos multi-multimillonarios de los super-ricos han creado unas sociedades fuertemente polarizadas. En tercer lugar, las M&A han *integrado* las economías y *socializado* la producción, aún con *beneficios privados* en aumento, exacerbando las contradicciones entre la propiedad privada y la producción social. En cuarto lugar, la concentración de riqueza en el sector financiero, de seguros e inmobiliario, sectores especulativos, hace más vulnerable a todo el edificio imperial. El sector financiero y el inmobiliario, que acumulan rentas e intereses sin producir valor, es *el sector más parásito*, y está divorciado de la producción directa de bienes y servicios y está sujeto a la máxima *volatilidad* y riesgo de crisis económica.

En quinto lugar, el boom a largo plazo y a gran escala de las manufacturas en China, Asia Oriental y el Sudeste Asiático ha dado lugar a unos precios internacionales que han batido récords en el caso de los metales básicos (cobre, plomo, estaño, níquel y zinc), los productos agrícolas (soja, trigo y azúcar) y los productos energéticos (gas, petróleo y etanol). Esto ha dado enormes beneficios a las elites de la exportación, y un gran incremento de los ingresos para los gobiernos en América Latina.

La «crisis» en América Latina hoy no es el «estancamiento» del capitalismo, sino un crecimiento basado en una mayor explotación del trabajo y la concentración de los ingresos en la elite gobernante y su clase dominante. Nunca en la historia reciente se había acumulado tanta riqueza en América Latina, y nunca la clase gobernante había destinado tanta riqueza al

consumo conspicuo, a las inversiones en ultramar y a la especulación inmobiliaria. Nunca había visto América Latina crecer a tantos multimillonarios ni la transformación de millonarios en billonarios que ha tenido lugar a lo largo de la década pasada, a pesar de la «crisis» de finales de 1990.

La combinación de privatización, saqueo y fusiones de 1990 y los precios mundiales astronómicos de los últimos siete años han creado inmensos superávits presupuestarios e imponentes fortunas privadas.

Estos cambios en la estructura del capitalismo han creado el objetivo básico para que a gran escala, y a largo tiempo haya una movilización popular y un conflicto de clase. Todos los ingredientes básicos para una transformación estructural están presentes hoy como nunca antes habían estado. Varios cambios estratégicos son necesarios y factibles. La clave está en la re-nacionalización de los sectores de exportación agro-mineral lucrativos más dinámicos- los cuales permitirán financiar un diversificado sector manufacturero, la producción de alimentos a gran escala en granjas altamente mecanizadas e importantes inversiones públicas para reconstruir los servicios sociales.

La segunda reforma necesaria y factible es la adquisición pública del sector dinámico del comercio exterior, que genera los beneficios más elevados, y constituye la mayor fuente de ingresos públicos para las inversiones a largo plazo. Obviamente, el desarrollo orientado hacia la exportación es un motor de crecimiento para el desarrollo social- especialmente en una época de crecimiento de los precios internacionales- *si el estado es dirigido por las clases populares*. Las preguntas reales son ¿qué clases sociales dirigen y controlan los beneficios, y cómo se invierten en el mercado local? Los ingresos de la exportación *distribuidos equitativamente* entre los productores locales, racionalmente invertidos entre los exportadores y el mercado doméstico y los controles de capital pueden convertirse en el vehículo que financie una transformación social.

El *re-desarrollo* urbano y rural popular requiere la reversión de la propiedad de la tierra a las elites de los negocios agrarios, especuladores y promotores de la construcción a los agrónomos del sector público aliados con campesinos,

jornaleros sin tierra y habitantes urbanos de bajos ingresos. La *reversión* de las tierras ilegalmente confiscadas requiere unos cambios fundamentales en el estado, la ley de propiedad y especialmente el sistema jurídico. Las oficinas y apartamentos de lujo pueden reconvertirse en instalaciones públicas para los servicios sociales, actividades culturales y viviendas de bajo alquiler. Las plantaciones a gran escala resultantes del desplazamiento violento, ilegal o arbitrario de granjeros y campesinos pueden convertirse en empresas de trabajadores-campesinos-rurales que generen beneficios.

## LA PARADOJA MODERNA: LA CONCENTRACIÓN CAPITALISTA Y LA SOCIALIZACIÓN POPULAR

La paradoja del actual sistema económico injusto es que ha creado todas las condiciones necesarias para una transformación social, bien entendida. Las fusiones y compras de empresas han *limitado* las bases económicas de la clase gobernante. El crecimiento del capital especulativo ha minado todo las formas paternalistas y hegemónicas de la explotación por las cuales los capitalistas manipulaban la conciencia de los trabajadores y los campesinos. El crecimiento de grandes fortunas ha distanciado más a los súper-ricos de las grandes masas de personas, acabando con las ilusiones de las masas de «alcanzar a los ricos». La racionalización de la economía basada en la introducción de nuevas tecnologías facilita el flujo de la información para la planificación pública. El crecimiento de una multitud de nuevos mercados con sus demandas de bienes estratégicos, debilita los boicots y bloqueos imperiales.

Desde una perspectiva histórica, los estrategas de los movimientos populares se benefician de las lecciones negativas procedentes de las experiencias con el capitalismo neoliberal y el colectivismo burocrático. La privatización concentra los beneficios, financia la especulación inmobiliaria y la fuga de capital al extranjero. Los rendimientos desiguales de las inversiones dejan en paro a una enorme cantidad de fuerza laboral y hacen que millones de profesionales y trabajadores especializados abandonen el país.



El colectivismo burocrático no consiguió gestionar adecuadamente el equilibrio entre la producción de bienes de capital y el consumo privado, la disciplina del trabajo colectivo y la productividad. Unas estructuras políticas arbitrarias fomentaron la pasividad y desanimaron la innovación.

## REPENSAR EL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA A LA LUZ DE LA EXPERIENCIA BOLIVARIANA

La promesa y las contradicciones de la experiencia Bolivariana Venezolana brindan experiencias y lecciones adicionales para repensar el desarrollo en América Latina y el Caribe, a pesar de las diferencias en cuanto al legado de recursos y las idiosincrasias históricas y culturales.

Estas características también sugieren que procedamos con cautela. Si bien se han producido profundos cambios en Venezuela, éstos no se han consolidado aún del todo. Sin embargo, podemos destacar varias lecciones importantes que contribuyen a que repensemos los recientes dogmas de «centro-izquierda».

Hagamos un resumen de la contribución del proceso Bolivariano a la inauguración del debate sobre el desarrollo.

En primer lugar, el proceso Bolivariano ha demostrado que la propiedad privatizada puede ser *re-nacionalizada* con éxito. La privatización no es «irreversible», no es la «única» dirección del desarrollo económico. En segundo lugar, la inserción a gran escala en la economía internacional no es incompatible con la creación de programas avanzados de asistencia social y empresas públicas. En otras palabras, la «globalización» no «requiere» toda la parafernalia de una economía neoliberal. La inserción y la participación en la economía internacional es compatible con una variedad de mezclas de propiedad pública y privada, unas pautas más equitativas de distribución de los ingresos, así como un incremento en el consumo público y privado.

El proceso Bolivariano demuestra que las ganancias imprevistas debidas a los altos precios de los productos no conducen necesariamente a unos enclaves de riqueza en un mar de pobreza.

En Venezuela, el gobierno controla los ingresos del comercio y reasigna fondos en beneficio de las clases populares en forma de programas masivos de educación, salud y alimentos subvencionados.

Por último, el proceso Bolivariano demuestra que un Presidente que impulsa un nacionalismo consecuente y el bienestar público puede llegar al poder en unas elecciones, *pero sólo puede seguir en el poder con la ayuda de movilizaciones populares masivas y el apoyo de sectores del ejército*. La victoria electoral del Presidente Chávez ha sido severamente probada por un golpe militar apoyado por el gobierno de EE.UU. (abril de 2002), un cierre patronal (diciembre de 2002 – febrero de 2003), paralizando y saboteando la industria del petróleo, y un referéndum financiado por EE.UU. En cada caso, *el proceso electoral sobrevivió debido a la intervención masiva en la acción extra-parlamentaria*: un millón de residentes de las barriadas urbanas hicieron una marcha contra los golpistas; un sector mayoritario de trabajadores del petróleo y una minoría de técnicos volvieron a poner en marcha la industria del petróleo; la inmensa mayoría de las clases populares se movilizó y organizó y derrotó al referéndum. El proceso Bolivariano demuestra que la política electoral, en determinadas circunstancias, puede abrir brechas importantes para el cambio político, pero que *requiere una acción directa masiva, independiente para defender el proceso, que apoye el régimen y defienda las industrias estratégicas nacionalizadas*.

Asimismo, el proceso Bolivariano demuestra la necesidad de unos profundos cambios estructurales en la naturaleza del aparato de estado. Importantes sectores del ejército y judiciales intervinieron en contra de procesos de cambio estructural. La existencia de la burocracia civil y diplomática, que en gran medida había sido instalada por los anteriores regímenes neocoloniales, no pone en práctica programas sociales, sabotea el proceso de asignaciones presupuestarias, retrasa *hasta el infinito* la reforma agraria, los programas de vivienda, mientras continúa con prácticas corruptas y sobornos.

La nueva realidad de América Latina, con sus florecientes economías de exportación y una estructura de clases muy polarizada, sus regímenes pre-nacionales y unos sistemas de información



modernos, sugiere que los movimientos sociales y los partidos políticos cuentan con todas las ventajas a la hora de *desafiar* al régimen existente. El foco de los movimientos de la oposición popular en los regímenes coloniales distribuye facilidades políticas politizando cada una de las demandas económicas. Esto es inevitable porque el *estado* juega un *papel decisivo* a la hora de *maximizar los beneficios* del sector de la exportación y de denegar la asignación de recursos a los trabajadores de los servicios sociales en el sector público.

Hoy, más que en cualquier otro momento del pasado, los regímenes de exportación pre-nacionales que están viviendo de las rentas, derechos e ingresos de actividades económicas coloniales son políticamente vulnerables. El masivo desplazamiento de los ingresos públicos procedentes de la inversión pública y los servicios sociales va acompañado de importantes recortes en los salarios y pensiones de los empleados públicos, creando una concentración urbana de clases militantes que se enfrenta al descenso social. La expansión de las multinacionales hacia el comercio minorista-centros comerciales- ha llevado a la bancarrota a los minoristas urbanos. La expansión de las «zonas de libre comercio» y de personal contratado ha minado la legislación social y la seguridad para la clase trabajadora industrial urbana. No se trata de meros problemas «sectoriales» económicos pasajeros, son problemas políticos nacionales, relacionados con la centralidad del estado y el poder del estado.

## CONCLUSIÓN: LOS INSTRUMENTOS DEL CAMBIO SOCIO-ECONÓMICO: LOS PROCESOS ELECTORALES Y EL PODER SOCIAL

En la medida en que los procesos electorales cambian la composición del *aparato de estado* y su *orientación* pueden ser útiles. Si lo único que se hace es «*injertar*» en el estado los nuevos funcionarios electos resultando la continuidad del orden antiguo. Ningún movimiento electoral progresista puede llegar al poder a menos que sea el producto de unas intensivas luchas de clase y nacionales, que aumenten la concienciación y creen organizaciones de masas extra-parlamentarias capaces de apoyar al movimiento contra los

inevitables golpes postelectorales y del sabotaje. En la mayoría de los casos, la clave del poder político no está en cuestiones electorales, sino en organizar el poder social y político fuera de los canales institucionales establecidos para garantizar un proceso continuo de transformación.

El poder social organizado es necesario porque incluso la propiedad pública puede ocultar nuevas desigualdades de clase, las cuales perpetúan la injusticia y la alienación. Además, las decisiones sobre inversión pública, asignación de superávit comercial y equilibrio entre consumo de capital y consumo público/privado requiere de la participación de los productores directos y de los consumidores.

Como punto de referencia, Venezuela proporciona algunas lecciones útiles, pero nadie debería construir un modelo basado en el proceso Bolivariano, así como en las prácticas de los regímenes de «centro-izquierda» en Latino América. En primer lugar, Venezuela ha sido y sigue siendo una economía rentista a pesar de los esfuerzos del Presidente Chávez por transformarla. En segundo lugar, ninguno de los regímenes autodenominados de «centro-izquierda» (Lula en Brasil, la familia Kirschner en Argentina, Evo Morales en Bolivia y Vázquez-Astori en Uruguay) ha roto con el modelo elitista de exportación agro-mineral, ni ha revertido los sectores económicos estratégicos privatizados. De hecho, Kirschner ha renovado una de las leyes de minería más regresivas en todo el hemisferio, con pagos de derechos que no superan el 2%, y Evo Morales ha entregado el Complejo Mutun de hierro-magnesio al cártel multinacional Indio, Jindel, en condiciones desfavorables (anti-nacionales) para Bolivia.

La lección de los cinco años de experiencia con la economía política de los regímenes de «centro-izquierda» es que no son de «izquierdas» ni de «centro», pero que son una parte inequívocamente de la «tercera ola» de regímenes neoliberales que llegaron al poder tras el colapso y la crisis de la segunda ola (Menem-De la Rúa, Sánchez de Lozada-Mesa, etc.) y han sido favorecidos y apoyados por los precios y demandas mundiales excepcionales. Los ejemplos del fracaso de la reforma estructural progresista bajo los nuevos (ex-izquierdistas) neoliberales nos muestra que las etiquetas ideológicas pasadas, los orígenes sociales



populares y la retórica anti-neoliberal no son un buen indicador de la práctica político-económica actual y las alianzas sociales en el poder político. Toda la clase política que se define a sí misma como de «centro-izquierda» está compuesta por profesionales que ascienden de clase social, funcionarios sociales y políticos de clase media baja y líderes de movimientos orientados hacia las elecciones. Usan sus vínculos pasados con la lucha social para conseguir poder político, riqueza económica y aceptación social por parte de las clases dominantes y homólogos extranjeros. Para evitar el círculo vicioso repetido de comenzar en la izquierda con el pueblo, pasar al «centro-izquierda» con la clase media y abrazar luego la derecha y las grandes empresas, los movimientos de masas deben ejercer un *control* democrático directo sobre sus líderes, vigilar de cerca sus programas sociales y las tácticas y estrategias de sus líderes.

60 Las *transformaciones estructurales* (reforma agraria, nacionalización y control popular directo, etc.) deben estar mediadas por las *circunstancias* políticas, basadas en los movimientos de masas populares organizados y la capacidad de diseñar, administrar las finanzas y ejecutar los programas. Los programas concretos que directamente mejoran las vidas son necesarios para granar la adherencia popular al proceso; pero delinear

claramente las «reglas del juego» para los diferentes aliados estratégicos entre quienes ostentan pequeñas y medianas propiedades en servicios, manufactura y agricultura es esencial para aislar a las elites financieras, inmobiliarias y agro-minerales. Es fundamental el fomento estatal de los medios de comunicación de masas, la cultura y el entretenimiento popular como alternativa a la propaganda de los medios de comunicación neocoloniales.

Los paquetes específicos de medidas de transformación y tiempo deberían reflejar las particularidades de cada país, pero el objetivo inmediato es acelerar la transición de una economía pre-nacional a una nacional. Esto implica la transformación de un mercado inmobiliario especulativo a un programa de viviendas sociales, de una economía de rentas, intereses, derechos y envíos de beneficios, basada en pagos del extranjero, a un mercado nacional autofinanciado y que enlace los recursos locales y las regiones. Las ganancias imprevistas del sector de la exportación deberían dar lugar a un fortalecimiento de la producción doméstica y a intercambios que expandan los sectores productivos y el consumo local basados en normas igualitarias que logren una participación política popular uniforme.